



JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ
Ibagué, veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Tipo de proceso	Acción de tutela
Radicación:	730013105006-2021-00151-00
Accionante(s):	KAROL TATIANA RODRIGUEZ MURCIA
Accionado(a):	COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO COIBA-PICALÉÑA.
Vinculado(s):	OFICINA JURIDICA COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO COIBA-PICALÉÑA.
Providencia:	Sentencia de primera instancia
Asunto:	Derecho fundamental de Petición

ASUNTO A TRATAR

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela interpuesta por KAROL TATIANA RODRIGUEZ MURCIA contra el COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO COIBA-PICALÉÑA., a la que se vinculó a la OFICINA JURIDICA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO COIBA-PICALÉÑA.

ANTECEDENTES

KAROL TATIANA RODRIGUEZ MURCIA promovió acción de tutela con el propósito que le sea amparado su derecho fundamental de petición y, en consecuencia, se ordene a las accionadas dar respuesta a la petición radicada con fecha 30 de abril del año que avanza.

Como sustento fáctico de la acción, expuso que se encuentra realizando trabajo de grado denominado "Perspectiva de género análisis documental del complejo carcelario y penitenciario Coiba Picaléña" por lo que el 30 de abril del año que avanza solicitó por medio de la dirección electrónica [aciudadanoepcpicaléña@inpec.gov.co](mailto:ciudadanoepcpicaléña@inpec.gov.co) ante el Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué información sobre el manejo interno de la política institucional de equidad de género y respeto por la diversidad, así como si existe documento interno que soporte la equidad de género frente a las mujeres privadas de la libertad; que al no obtener respuesta el día 27 de junio del 2021 radicó ante la misma dirección electrónica memorial de impulso.

De igual forma, manifestó que al no tener respuesta el día 9 de julio del 2021 se dirigió presencialmente hasta la oficina de atención al ciudadano del complejo penitenciario, sin embargo, le informaron que la única que podría darle respuesta a la solicitud era la oficina jurídica del penal.

TRÁMITE IMPARTIDO

Mediante auto de 13 de julio del año en curso se admitió la acción de tutela en contra del COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO COIBA-PICALÉÑA, y se ordenó vincular a la OFICINA JURIDICA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO COIBA-PICALÉÑA, concediéndole un término de 48 horas para que se pronunciaran respecto de los hechos y pretensiones de esta acción constitucional.

El Complejo Penitenciario y Carcelario Coiba-Picalaña al dar respuesta manifestó que el día 14 de julio del corriente dio respuesta al derecho de petición mediante la remisión de documento denominado *“los lineamientos grupo tratamiento penitenciario”* el cual incorpora lo relacionado con políticas institucionales que atañen a la aplicación del sistema progresivo a través de la clasificación en fase de tratamiento penitenciario de los privados de la libertad con condena ejecutoriada.

Por lo anterior, solicitó se declare la no vulneración de los derechos fundamentales de la accionante y se les desvincule del presente amparo.

CONSIDERACIONES

Este Despacho es competente para conocer de la acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1983 de 2017.

PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde al Despacho determinar si la accionada ha vulnerado el derecho fundamental de petición del accionante.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela se erige como un mecanismo de rango constitucional, instituido para amparar los derechos fundamentales de las personas cuando sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Este procedimiento tiene un carácter residual o subsidiario, y, por tanto, sólo procede cuando la persona afectada en sus derechos fundamentales no dispone de otro medio de defensa judicial para que se restablezca el derecho vulnerado o para que desaparezca la amenaza a que está sometido, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Bajo esta premisa, se tiene que el objeto esencial de la acción de tutela es garantizar la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales.

La H. Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela ha sido establecida como un mecanismo de carácter excepcional encaminado a la protección inmediata, directa y eficaz de los derechos fundamentales de las personas frente a las violaciones o vulneraciones de que pueden ser objeto, ora por las autoridades públicas, ora por los particulares en los casos previstos por la ley.

DERECHO DE PETICIÓN

El derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, ha sido definido por la H. Corte Constitucional en sentencia T – 587 de 2006 como: *“determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, pues permite a toda persona, entre otras cosas, reclamar ante las autoridades*

explicaciones acerca de las decisiones adoptadas y que de manera directa o indirecta les afectan¹

En la misma providencia la Alta Corporación indicó que son componentes elementales del derecho de petición: la pronta respuesta a las peticiones formuladas ante la autoridad pública, y que la respuesta sea suficiente, efectiva y congruente con lo solicitado, para que se entienda que ha resuelto de fondo y satisfecho la solicitud del peticionario².

Señalando en líneas posteriores, *“que una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario³; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea⁴ (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta⁵”*.

Aunado a lo anterior, la Ley 1755 de 2015 en su artículo 14 establece que *“salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”*.

Finalmente, es de advertir que el Decreto 491 de 2020, amplió los términos para resolver las peticiones presentadas durante el estado de emergencia, así:

- Por regla general 30 días;
- Petición de documentos e información 20 días
- Consultas en relación a la materia a su cargo 35 días.

Sin embargo, el parágrafo del art. 5º previó que dicha ampliación no aplicaba a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales.

En cuanto a las solicitudes radicadas a través de medios electrónicos, dichos medios han sido definidos como herramientas que permiten producción, almacenamiento o transmisión digitalizada de documentos, datos e información a través de cualquier plataforma de comunicación abierta o restringida.

De acuerdo con el artículo 5 del CPACA, la formulación de solicitudes podrá efectuarse por cualquier medio que tenga disponible la entidad receptora, este precepto legal va acorde al artículo 7 de el mismo compendio, el cual ordena a las entidades adoptar medios electrónicos para dar trámites a las solicitudes. En ese orden de ideas la Ley no limitó el ejercicio del derecho de petición, sino que amplió la forma de radicar solicitudes lo que genera una constante evolución en materia de las TIC.

Así las cosas, la H. Corte Constitucional en sentencia T-230 del 2020 estableció los criterios y las reglas de radicación a través de medios tecnológicos, así:

¹ Es pertinente resaltar que éste no es el único objeto del derecho de petición. En efecto, según la normatividad que regula este derecho (artículos 5 y s del C.C.A.) la peticiones pueden ser en interés general, particular, también pueden conllevar solicitudes de información o documentos, copias, formulación de consultas, etc.

² Al respecto ver sentencias: T-439 de 2005, T-325 de 2004, T-294 de 1997 y T-457 de 1994 entre otras.

³ Ver sentencias T-1160A de 2001, T-581 de 2003

⁴ Sentencia T-220 de 1994

⁵ Sentencia T-669 de 2003

(i) determinar quién es el solicitante, (ii) que esa persona aprueba lo enviado y (iii) verificar que el medio electrónico cumpla con características de integridad y confiabilidad, las autoridades no podrán negarse a recibir y tramitar las peticiones que sean formuladas ante ellas por medio de mensajes de datos, a partir de cualquier tipo de plataforma tecnológica que permita la comunicación entre el particular y la entidad.

CASO EN CONCRETO

En el presente evento la actora constitucional pretende que se amparen sus derechos fundamentales de petición y en consecuencia se ordene al Complejo Penitenciario y Carcelario COIBA-PICALÉÑA otorgar respuesta a la petición presentada el día 30 de abril del año que avanza.

De cara a los medios de prueba aportados a la instancia, se encuentra acreditado que la accionante el día 30 de abril del año en curso remitió solicitud a través de la dirección electrónica aciudadano.epcpicalena@inpec.gov.co al Compelo Penitenciario y Carcelario Coiba-Picaléña con la finalidad de obtener información para realizar su trabajo de grado.

El Complejo Penitenciario y Carcelario Coiba-Picaléña al dar respuesta al presente amparo informó que el día 14 de julio respondió la solicitud de la accionante remitiéndole el documento denominado *“los lineamientos grupo tratamiento penitenciario”*.

De igual forma, la accionante en comunicación sostenida con el Despachó, informo que el día 14 julio del 2021 recibió a la dirección de correo electrónico respuesta a la solicitud presentada, el cual es objeto de solicitud de amparo Constitucional, por lo que, cualquier orden de tutela en esta instancia carecería de relevancia jurídica.

De lo anterior, se advierte la carencia actual de objeto por hecho superado.

Sobre el particular la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha sido unísona al manifestar que:

“Esta Corporación ha considerado que cuando hay carencia de objeto, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado.”^[27]

En la Sentencia T-988/02, la Corte manifestó que “(...) si la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia y por lo tanto razón de ser.”

En este orden de ideas, se ha entendido que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, se encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, ha cesado, desapareciendo así toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales.”⁶

Y en sentencia T-011/16 señaló:

“En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y “previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la

⁶ T-154 de 2012

*vulneración o amenaza de los derechos fundamentales*⁷. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.

Por consiguiente, en el presente asunto se presenta carencia actual de objeto por la existencia de un hecho superado, y así se declarará.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito Judicial de Ibagué, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DENEGAR la petición constitucional elevada por KAROL TATIANA RODRIGUEZ MURCIA identificada con cedula de ciudadanía No. 1.110.594.918 por haberse configurado hecho superado, conforme lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notificar a las partes esta providencia, por los medios más expeditos y eficaces (Art. 30 del Dcto. 2591/1991).

TERCERO: Si esta providencia no fuere impugnada, envíese el expediente a la H. Corte Constitucional, para su eventual revisión (art. 32 del Dcto 2591/1991).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JEIMMY JULIETH GARZÓN OLIVERA
Juez

⁷ Sentencia T-011 de 2016.